

DECRETO NUMERO 97 DE 1925

(de 11 de Junio)

sobre procedimiento de Policía Correccional.

El Presidente de la República,

en uso de sus facultades legales,

DECRETA:

Artículo 1o. La fuerza de policía, cualquiera que sea el servicio que preste, sólo puede detener por su propia cuenta a los delincuentes sorprendidos IN-FRAGANTI. En estos casos el detenido debe ser conducido dentro de las tres horas siguientes a su detención ante la autoridad de policía más cercana, a fin de que ésta lo juzgue, o lo ponga a disposición del funcionario que debe juzgarlo, según fuere de lugar.

Los Oficiales de Guardia de los Cuarteles de Policía carecen de autoridad para calificar infracciones de las leyes penales.

Artículo 2o. Se debe entender por delincuente a todo el que contravenga una ley penal. Las infracciones de la ley penal se dividen en delitos y faltas. Estas últimas las definen y castigan el Código Administrativo y las leyes que lo reforman y adicionan.

Artículo 3o. Debe entenderse que un delincuente es cogido IN-FRAGANTI en los casos siguientes:

- a) Cuando fuere sorprendido en el momento mismo en que está cometiendo el delito o falta;
- b) Cuando el infractor fuere perseguido inmediatamente después de cometer el delito o falta, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que los persiguen; y
- c) Cuando el delincuente fuere sorprendido inmediatamente después de cometido el delito o falta, con efectos o instrumentos que infundan la presunción vehemente de su participación en ellos.

Artículo 4o. Como desde la vigencia del Código Administrativo cesó la división de los asuntos de policía correccional en negocios que debían juzgarse verbalmente, que eran de los que debían conocer los Jueces de Policía, y negocios cuyo juzgamiento debía ser escrito; en atención a que el Código Judicial y las leyes que lo reforman, derogaron toda la legislación anterior de la materia, y por cuanto que en la actualidad, según ley reciente, los Jueces de Policía están asimilados en sus funciones, a los Corregidores, se dispone que dicho Jueces de Policía se ciñan en los asuntos de que conocen al procedimiento que para juicios de policía traen el Código Administrativo, las leyes que lo adicionan y reforman y los decretos reglamentarios que el Poder Ejecutivo dicte sobre el particular.

Artículo 5o. Los asuntos de policía correccional de que conozcan los Jueces de Policía, que no hayan podido ser decididos durante la misma noche

en que se puso el denuncia, continuarán tramitándose al día siguiente por el Corregidor del Barrio en que se cometió la falta.

Artículo 6o. Las autoridades de policía impondrán las penas por medio de una resolución escrita en que conste la filiación del acusado, las pruebas aducidas en su contra, la descripción de los hechos que constiutyen la falta y las disposiciones infringidas. Además, en todo caso, ya sea que se condene o que se absuelva al sindicado, se levantará un acta pormenorizada de la respectiva audiencia.

Artículo 7o. Las multas que por faltas impongan las autoridades de policía, se pagarán precisamente en las respectivas Tesorerías Municipales o a los funcionarios especiales que nombren los respectivos Tesoreros para percibir las en su nombre. Sólo se podrá acreditar el pago de una multa con los recibos que extiendan los Tesoreros o sus substitutos. Los recibos en que conste que se ha pagado una multa se agregarán al respectivo expediente.

Artículo 8o. Para recaudar las multas que se impongan por los Jueces de Policía, el Tesorero Municipal autorizará, bajo su responsabilidad, a la persona o empleado que crea conveniente, quien por ésto queda facultado para extender los correspondiente recibos:

Artículo 9o. En asuntos de policía correccional únicamente podrá interponerse el recurso de apelación contra las resoluciones que finalicen un negocio y por las cuales se imponga alguna de las penas de que trata el artículo 1715 del Código Administrativo, modificado por el artículo 8o. de la Ley 58 de 1919.

Artículo 10. En asunto de policía las apelaciones deben interponerse dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la resolución respectiva. Una vez cumplido dicho término sin que se hubiese interpuesto recurso legal alguno, la decisión de que se trata queda ejecutoriada y debe cumplirse sin más trámites.

Artículo 11. Las autoridades de primera instancia, una vez concedida una apelación, deben remitir al superior jerárquico, de oficio y a la mayor brevedad, todo lo actuado en el caso de que se trata, a fin de que el funcionario que va a decidir la segunda instancia se ponga al corriente de dicho caso.

Artículo 12. El superior decidirá de conformidad con el inciso segundo del artículo 1715 del Código Administrativo y las reformas del mismo, siguiendo un procedimiento análogo al prescrito en los artículos 1708 a 1714 de ese cuerpo de leyes, y cuando sea necesario, practicará o hará practicar las pruebas que tiendan a esclarecer puntos dudosos, ajustándose para ello a lo preceptuado en el artículo 1720 de la misma excerta.

Artículo 13. Las conmutaciones de penas sólo podrán hacerse por el funcionario que decidió el asunto en primera instancia. Para que en un caso concreto pueda conmutarse una pena es menester que la ley establezca para ese caso como pena única dicha pena sin darle el carácter de inmutable y que el funcionario que la imponga especifique en la resolución en que hace tal cosa que ella podrá conmutarse en la forma legal.

Artículo 14. El recurso de hecho, entendiéndose por tal el que define el artículo 1038 del Código Judicial, deberá interponerse dentro de las veinticuatro horas siguiente a aquélla en que se denegó el de apelación. Mientras que el superior no conceda el recurso y ordene al inferior el envío de las diligencias o informes del caso, no podrá aquí decidir el negocio.

Artículo 15. En los juicios de policía correccional que se sigan por in-

fracción de las leyes relativas a los juegos prohibidos, a la venta y uso de sustancias venenosas en general, y a la moralidad y buenas costumbres, se oirá al Ministerio Público a fin de asegurar mejor el cumplimiento de la vindicta pública.

Artículo 16. Por regla general, los Corregidores juzgarán las faltas y contravenciones que durante el día tienen lugar en sus respectivos Corregimientos, exceptuándose aquéllas cuyo conocimiento ha sido atribuido de modo expreso a otra autoridad. Sin embargo, cuando un Jefe de Policía de los de primera instancia aprehende el conocimiento de un negocio, inhibe IPSO FACTO a los demás que tiene jurisdicción en ese mismo negocio, para conocer de él, salvo lo dispuesto en el artículo 50. del presente Decreto.

Artículo 17. Sólo los Alcaldes, Corregidores y Jueces de Policía pueden aceptar, cada uno en sus casos, y cuando disposiciones vigentes lo permitan, fianza de excarcelación por faltas. En la segunda instancia de los juicios de policía correccional, pueden aceptarlas los Gobernadores en las mismas condiciones.

Artículo 18. Los Corregidores y los Jueces de Policía de Panamá y Colón tienen la obligación de dar, en todo caso, parte detallado, a los respectivos Alcaldes, de las penas que impongan por infracción de los reglamentos de tránsito y de las leyes y decretos sobre decencia y moralidad públicas.

Artículo 19. Todo allanamiento de morada debe ser ordenado por la autoridad competente, de acuerdo con las formalidades y requisitos legales. La misma autoridad que ordena el allanamiento debe presidirlo. De todo acto de allanamiento que practiquen las autoridades de Policía se dejará constancia pormenorizada en una acta que se levantará al efecto y que firmarán, junto con la autoridad que lo ha practicado y su secretario, los testigos que hayan presenciado el allanamiento.

Artículo 20. La recompensa del cincuenta por ciento de las multas que otorga el artículo 1248 del Código Administrativo a quienes denuncien un juego prohibido de que **NO TENGA CONOCIMIENTO LA POLICIA**, sólo se otorgará a los que presenten certificado dado por el funcionario ante quien se puso la denuncia, otorgado en el momento en que este hecho tuvo lugar, funcionario que enviará inmediatamente copia de dicho certificado al Alcalde y al Gobernador de la Provincia.

Artículo 21. Los individuos detenidos por faltas cometidas sentre las cinco y las seis de la tarde podrán ser puestos en libertad por los Jueces de Policía mediante fianza que prestarán al efecto, si tal libertad con fianza procediere de acuerdo con la ley.

Artículo 22. Los Juzgados de Policía de Panamá y Colón funcionarán en los respectivos Cuarteles Centrales de Policía.

Artículo 23. Los Corregidores de las ciudades de Panamá y Colón despacharán en los días feriados durante 6 horas, en el Cuartel Central, los casos de policía correccional que en tales días se presenten. Con este fin arreglarán entre sí un turno, de modo que en cada día feriado corresponda el despacho a uno sólo de ellos.

Artículo 24. Para los efectos del artículo 796 del Código Administrativo, los Jueces de Policía tendrán como suplentes ad-hoc a sus respectivos Secretarios, quienes durante las vacaciones de sus Jefes desempeñarán a la vez las funciones de Secretario y Juez, salvo que la correspondiente Municipalidad tenga a bien votar una partida para pagar un Secretario interino.

Artículo 25. Queda derogado el Decreto número 214 de 1919, dictado por el órgano de la Secretaría de Gobierno y Justicia.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Panamá, a los once días del mes de Junio de mil novecientos veinticinco.

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

DECRETO NUMERO 98 DE 1925

(de 15 de Julio)

por el cual se reglamenta la inspección del comercio de artículos de segunda mano.

El Presidente de la República,

en uso de la facultad que le otorgan el artículo 2o. del Acto Legislativo de 26 de Diciembre de 1918 y el ordinal 11 del artículo 629 del Código Administrativo,

DECRETA:

Artículo 1o. En las Alcaldías de la República se llevará un registro de las personas que hacen el negocio de comprar y vender artículos de segunda mano, quedando tales personas obligadas a inscribirse en ese registro dentro de los diez días siguientes a la publicación del presente Decreto. Quienes no cumplieren con las presente obligación serán penados por el Alcalde respectivo con multa de diez a quinientos balboas.

Artículo 2o. A toda persona que se inscriba en el registro de que trata el artículo anterior se le expedirá un certificado en donde conste que se ha registrado como comerciante en artículos de segunda mano. Este certificado será la única prueba de que se ha cumplido con dicho requisito.

Artículo 3o. Las Alcaldías de la República tendrán al corriente a la Sección de Investigaciones de la Policía Nacional de las inscripciones de comerciantes en artículos de segunda mano que se vayan haciendo. Los miembros de este Departamento del Cuerpo de Policía exigirán, cuantas veces sea necesario, a las personas de que tengan conocimiento que hacen el negocio expresado, la exhibición del certificado de que trata el artículo anterior, y si no lo presentaren darán de ello cuenta inmediata al respectivo Alcalde para los fines consiguientes.

Artículo 4o. Los comercinates en artículos de segunda mano llevarán a su vez un registro de todos y de cada uno de los artículos de esta naturaleza que adquieran, indicando en él el nombre completo del vendedor, su nacionalidad y domicilio, el valor dado por el objeto y demás datos que a su juicio sean necesarios. Este registro deberán mostrarlo a la Policía cada vez que ésta se lo exija. Quienes no lo llevaran se harán acreedores a una multa de

veinte a doscientos cincuenta balboas, que será impuesta por el Alcalde del respectivo Distrito.

Artículo 5o. Los pesquisas que el Jefe de la Oficina de Investigaciones designe para el efecto, inspeccionarán periódicamente las casas registradas como de compra-venta de artículos de segunda mano, dando parte inmediatamente al Alcalde del respectivo Distrito, de los artículos que en tales casas hallen que son de procedencia sospechosa. El Alcalde hará enseguida depositar tales artículos en lugar seguro, hasta que se averigüe de modo satisfactorio la procedencia de los mismos. Si resultaren ser el producto de un acto delictuoso, serán puestos enseguida a disposición de la autoridad competente para los fines consiguientes. En caso contrario, serán restituídos al comerciante que los tenía.

Artículo 6o. A las personas que se dediquen al comercio de artículos de segunda mano se les cancelará la inscripción de que trata el artículo primero del presente Decreto y no podrán dedicarse más a esa clase de comercio si por más de tres veces se encuentran en su establecimiento objetos hurtados o robados.

Lo dicho se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1678 y 1679 del Código Administrativo.

Artículo 7o. Las casas de empeño quedan comprendidas dentro de las disposiciones del presente Decreto.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Panamá, a los quince días del mes de Junio de mil novecientos veinticinco.

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

DECRETO NUMERO 103 DE 1925

(de 19 de Junio)

por el cual se modifica el artículo 7o. del Decreto número 98 de 15 de Junio del año en curso.

El Presidente de la República,

en uso de sus facultades legales,

DECRETA:

Artículo único. El artículo 7o. del Decreto número 98 de 15 de Junio del año en curso, expedido por el órgano de esta Secretaría, quedará así:

“Los directores y dependientes de casas de empeño procurarán cercionarse, por todos los medios a su alcance, de que las prendas que se van a empeñar a sus establecimientos no tienen procedencia ilegítima. En los casos en que encontraren sospechosos el origen de tales prendas, darán

en seguida cuenta a la policía y al Alcalde del Distrito, para los fines consiguientes."

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Panamá, a los diecinueve días del mes de Junio de mil novecientos veinticinco.

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

DECRETO NUMERO 130 DE 1925

(de 28 de Julio)

por el cual se dictan algunas disposiciones en relación con los artículos 1294 y 1295 del Código Administrativo.

El Presidente de la República,

en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1294 del Código Administrativo, en su parte principal dice así:

"Es prohibido dar en arrendamiento en el centro de las poblaciones, casas, habitaciones o parte de ellas a mujeres públicas o de reconocida mala vida."

Que el mismo Código en su artículo 1295, establece:

"La Policía no permitirá que se establezcan casas o reuniones destinadas a prácticas de desenfreno o libertinaje."

DECRETA:

Artículo 1o. Dentro de los diez días siguientes a la promulgación de este Decreto, en las ciudades de Panamá y Colón, y de treinta en el resto de la República, los Alcaldes de los Distritos señalarán, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 1294 y 1295 del Código Administrativo, los centros de cada población donde no puedan habitar las mujeres públicas o de reconocida mala vida, ni establecerse reuniones destinadas a prácticas de desenfreno o libertinaje.

Los respectivos Alcaldes podrán dar un término improrrogable hasta de treinta días para que se cumplan las disposiciones que dicten en obediencia del presente Decreto.

Artículo 2o. Los Alcaldes establecerán invariablemente en dichas disposiciones que los contraventores a ellas o al presente Decreto, ya sean inquilinos o propietarios, incurrirán por cada infracción en una pena de sesenta a noventa días de arresto, o en la de multa de cincuenta a cien balboas, o en la de tres a seis meses de confinamiento, de conformidad con lo que dispone el artículo 1297 del Código Administrativo.

Artículo 3o. Los Decretos que dicten los Alcaldes y las penas que impongan en cumplimiento de las mismas, necesitan de la aprobación previa de los respectivos Gobernadores.

Artículo 4o. Señálase a los Alcaldes de la República para cumplir el presente Decreto, los términos a que se refiere el artículo primero del mismo

Artículo 5o. Concédese acción popular para denunciar a los infractores del presente Decreto y de las disposiciones que dicten los Alcaldes en su cumplimiento.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Panamá, a los veintiocho días del mes de Julio de mil novecientos veinticinco.

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

DECRETO NUMERO 137 DE 1925

(de 30 de Julio)

por el cual se reforma el Decreto número 130 de 1925.

El Presidente de la República,

en uso de sus facultades legales,

DECRETA:

Artículo único. El artículo 3o. del Decreto número 130 del 28 del mes en curso, expedido por el órgano de esta Secretaría, quedará así:

“Artículo 3o. Los Decretos que dicten los Alcaldes en cumplimiento del presente serán consultados con los respectivos Gobernadores para su aprobación o censura. Las infracciones de estos mismos Decretos serán juzgadas siguiendo el procedimiento de policía correccional existente.”

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Panamá, a los treinta días del mes de Julio de mil novecientos veinticinco.

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

DECRETO NUMERO 131 DE 1925

(de 28 de Julio)

por el cual se dispone la expulsión de extranjeros no deseables.

El Presidente de la República,

en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

1o. Que el artículo 6o. de la Ley 76 de 1924 faculta al Poder Ejecutivo para reglamentar el procedimiento que ha de seguirse en la deportación de los extranjeros perniciosos o no deseables.

2o. Que la Ley 64 de 2 de Abril del presente año dispone, entre otras cosas:

“Artículo 11. El artículo 1875 del Código Administrativo quedará así: En general es libre la entrada en el territorio de la República para todos los extranjeros; sin embargo, son considerados como inmigrantes de rechazo:

c) Los mendigos, vagos de reconocida mala conducta, presidiarios o criminales que hayan estado bajo la acción de la justicia y que hayan sido declarados culpables, o que admitan haber cometido un delito;

d) Los que revelen señas de alcoholismo habitual;

f) Las mujeres solas de más de cuarenta años que vengan sin la ayuda del marido, hermano, hijo o nieto válido;

g) Las personas que prediquen la transformación de la sociedad por medios violentos, los expulsados de otro país como anarquistas de cualquier clase o denominación, las personas que directa o indirectamente procuren o traten de procurar o importar prostitutas o personas para el ejercicio de la prostitución.”

3o. Que el artículo 188 del mismo Código dice:

“Para llevar a cabo la expulsión de cualesquiera de los casos previstos en este capítulo, bastará que se haga constar sumariamente la culpabilidad del extranjero, y que se dicte la resolución correspondiente por el Presidente de la República y el Secretario de Gobierno y Justicia, previo acuerdo del Consejo de Gabinete.”

4o. Que en atención al incremento considerable que ha alcanzado la inmigración de elementos perniciosos, el Consejo de Gabinete ha autorizado su expulsión,

DECRETA:

Artículo único. Ordénase a los Gobernadores de Provincia iniciar inmediatamente una investigación sumaria con el fin de establecer quiénes son, en sus respectivas localidades, los extranjeros no deseables, acreedores a la pena de deportación.

De esa investigación darán cuenta a la Secretaría de Gobierno y Justicia para los fines consiguientes.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Panamá, a los veintiocho días del mes de Julio de mil novecientos veinticinco.

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

DECRETO NUMERO 178 DE 1925.

(de 15 de Octubre)

por el cual se dicta una medida de Policía.

El Presidente de la República,

en uso de las facultades que le conceden los numerales 7o. y 11 del artículo 629 del Código Administrativo y el artículo 2o. del Acto Legislativo de 1918,

DECRETA:

Artículo 1o. Los que por medios fraudulentos o con pretextos infundados consiguieren alterar los precios naturales que resultan de la libre concurrencia de las mercancías, rentas públicas o privadas o cualesquiera otras cosas que fueren objeto de contratación, serán castigados por la Policía correccionalmente con multa de veinticinco a doscientos balboas.

Artículo 2o. Cuando el fraude o abuso expresado en el artículo anterior recayere sobre cosas alimenticias u otros objetos de primera necesidad, la pena será de veinte a cien balboas.

Para la aplicación de estas penas bastará que el hecho haya comenzado a ejecutarse.

Artículo 3o. Las disposiciones del presente Decreto no afectan en nada a las del Código Penal.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Panamá a los quince días del mes de octubre de mil novecientos veinticinco.

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

DECRETO NUMERO 183 DE 1925

(de 19 de Octubre)

por el cual se establece el recurso de revisión de resoluciones de policía ejecutoriadas.

El Presidente de la República,

en uso de sus facultades legales,

DECRETA:

Artículo 1o. En asuntos de Policía habrá lugar al recurso de revisión contra una resolución ejecutoriada en los casos siguientes:

a) Cuando estén sufriendo condena dos o más personas en virtud de sentencia contradictoria por causa de una misma falta que no haya podido ser cometida sino por una sola; y

b) Cuando alguno haya sido condenado en virtud de sentencia cuyo fundamento haya sido un testimonio o documento declarado después falso.

Artículo 20. En los casos mencionados en el artículo anterior el recurso de revisión puede interponerse en cualquier tiempo.

Artículo 30. A la solicitud sobre revisión de la resolución se acompañarán las pruebas a los hechos en que se funde el recurso; y el Jefe de Policía respectivo concederá un término probatorio de tres días.

Dentro de las veinticuatro horas siguientes al vencimiento de dicho término se recibirán alegatos de las partes. La autoridad de policía del conocimiento puede, además, practicar cuantas diligencias estime convenientes para mejor proveer.

Artículo 40. Cuando por consecuencia de la sentencia anulada, hubiere sufrido el condenado alguna pena corporal, si en la nueva sentencia se le impusiera alguna otra, se tendrá en cuenta para el cumplimiento de ésta todo el tiempo de la anteriormente sufrida y su naturaleza.

Artículo 50. Es competente para conocer del recurso de que trata el presente Decreto el mismo Jefe de Policía que dictó la resolución contra la cual se interpone.

Artículo 60. No habrá recurso alguno contra las resoluciones por las cuales se decida la solicitud de revisión de una resolución ejecutoriada.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Panamá, a los diecinueve días del mes de Octubre de mil novecientos veinticinco.

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

RESOLUCION NUMERO 9

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Primera.—Resolución número 9.—Panamá, 22 de Enero de 1925..

Etanislao González, vecino de David, se presentó ante el Alcalde de ese Distrito en solicitud de que le fueran entregados dos hijos naturales que ha reconocido y que se encuentran en poder de la madre de los mismos, la señora Agripina Jiménez, alegando para ello la patria potestad que como padre tiene derecho a ejercer sobre sus inmediatos descendientes menores de edad. Los hijos reclamados son, uno de cuatro años de edad, y el otro de tres. El Alcalde citado acogió favorablemente la petición de González, por lo cual la Jiménez apeló de la resolución dicha, que fué confirmada por el Gobernador de la Provincia de Chiriquí. Por este motivo la misma Jiménez ha pedido que el Poder Ejecutivo avoque el conocimiento de este negocio, a lo cual se ha accedido. Para decidir este asunto en definitiva se considera lo siguiente: